

lan, Litec-Giuffrè Editore, 1995, 223 pp.

Esta nueva publicación de Derecho eclesiástico, de la Facultad de Derecho de «l'Università degli studi» de Milán, permite alcanzar una visión global del estatuto reconocido a los diversos cultos en las Constituciones de los principales países de la Unión europea, trece en este caso (y no de todos, como el título de la obra lo haría suponer). El conjunto de los trabajos va precedido de un informe sintético muy completo (pp. 1-34), elaborado por el profesor Jean Duffar, de la Facultad de Derecho de París Saint-Maur.

No se trata de reproducir aquí el contenido de este trabajo, ni de intentar resumir cada intervención. A quienes les interese particularmente el tema, ahí encontrarán informaciones precisas y preciosas, debidamente fundamentadas en los textos en vigor de cada país, y presentadas y comentadas por Axel von Campenhausen (Alemania), Bruno Primetshofer (Austria), Rik Torfs (Bélgica), Inger Döubeck (Dinamarca), José M.^a González del Valle (España), Jean Morange (Francia), Francis Lyall y David Mc Clean (Gran Bretaña), Charalambos Papastathis (Grecia), James Casey (Irlanda), Cesare Mirabelli (Italia), Alexis Pauly (Luxemburgo), Sophie C. Van Buesterveld (Países Bajos) y José De Sousa E Brito (Portugal). Queremos, en cambio, subrayar fundamentalmente —con el profesor Duffar—, que la presentación de la parte correspondiente a los cultos en cada país no se limita, de hecho, a las solas disposiciones de orden constitucional, sino que hace referencia también a las disposiciones legislativas —que son

como su prolongación— y sin las que el conocimiento de la realidad quedaría reducido o demasiado general, y, en cualquier caso, demasiado abstracto.

De la lectura atenta de las comunicaciones resulta —y es quizá una de las principales enseñanzas de este Coloquio organizado por la Facultad de Derecho Jean Monnet de la Universidad de París XI— que el Derecho interno de los trece Estados considerados tiene una notable similitud en el régimen jurídico de los cultos. Esta particularidad, por otra parte, ha sido reforzada con las disposiciones de instrumentos internacionales como la Convención europea de los derechos del hombre y su Protocolo adicional, así como con la jurisprudencia de los órganos de la Convención.

DOMINIQUE LE TOURNEAU

Beni culturali di interesse religioso. Legislazione dello Stato ed esigenze di carattere confesionale, a cura di **GIORGIO FELICIANI**. Società editrice il Mulino, Bologna, 1995, 297 pp.

El presente volumen es, de nuevo, una muestra de la singular actualidad que han cobrado en Italia, en los últimos años, las cuestiones relativas a la conservación, tutela y revalorización de los bienes culturales de interés religioso, que son la mayor parte del patrimonio histórico y artístico de la Nación. Por otra parte, la reorganización de las estructuras y circunscripciones eclesiásticas, que siguió a la reforma de los Pactos Lateranenses, ha hecho aún más urgente la preservación de tales bienes.

Las disposiciones del Acuerdo concordatario de 1984, que vinculan a la

Santa Sede y a la República italiana a una activa colaboración en el campo de los bienes culturales de interés religioso pertenecientes a los entes eclesiales, han suscitado en sede institucional y científica un amplio y apasionado debate. Debate que subraya el inseparable destino de tales bienes al uso religioso y al disfrute cultural, y que ha hecho surgir un nuevo espíritu de colaboración, en el común convencimiento de su valor artístico y cultural.

El volumen ofrece los resultados de la vasta y sistemática investigación realizada por algunos profesores de diversas universidades italianas, junto (y aquí radica la novedad de su contribución) a algunos estudiosos que intervienen directamente en la Administración del Estado, en la organización de las confesiones o en las asociaciones de este tipo, sobre esta problemática que, en sus perfiles más generales, no afecta sólo a la Iglesia Católica sino también a las otras confesiones religiosas, como demuestra la específica tutela de sus intereses en la materia, garantizada en los Convenios suscritos con el Estado italiano. Un diálogo a alto nivel entre la doctrina, la Administración y las instituciones confesionales que puede, entonces, continuar su desarrollo sobre unas bases cada vez mejor conocidas y más definidas.

Las aportaciones recopiladas en este volumen son fruto de un proyecto nacional de investigación, financiado por el Ministerio de Universidades y de Investigación Científica (el 40% de los fondos), y promovido por la Universidad de Florencia, la Universidad Católica de Milán, la de Perugia y la de Turín. Tal proyecto, coordinado por el Profesor G. Barberini, de la Universidad

de Perugia, ha estado dirigido por un Comité científico compuesto por los profesores G. Barberini (Perugia), G. Feliciani (Católica de Milán), S. Ferrari (Turín) y F. Margiotta Broglio (Florencia). Los resultados de la investigación fueron expuestos y debatidos en un Congreso nacional, organizado por los citados ateneos y por el CEsEN de Milán, dirigido por el profesor Feliciani, que también ha contribuido a la edición de este volumen, en el que tales resultados, revisados a la luz de los debates del Congreso, han sido publicados. El Congreso, celebrado del 23 al 26 de junio de 1993 en el Complejo monumental de San Miguel, Roma, bajo el patrocinio del Ministerio para los Bienes Culturales y Ambientales y el de Universidades e Investigación Científica, se inauguró con un mensaje de saludo del Ministro Ronchey y del Presidente de la CEI, Cardenal Ruini, y ha disfrutado de una amplísima participación de estudiosos.

Francesco Margiotta Broglio, profesor de la Universidad de Florencia y Presidente de la Comisión gubernamental para la aplicación del Concordato, es autor del prólogo (págs. 7-17), con interesantes observaciones sobre el significado y el alcance de la investigación que se recoge en el libro. Su lectura da las claves fundamentales del amplio debate suscitado en Italia, tanto en sede académica como en las correspondientes instancias administrativas y gubernamentales, sobre la necesaria «coordinación funcional» entre los órganos del Estado y las autoridades de las confesiones religiosas en relación con el patrimonio histórico-artístico que, junto al valor cultural, tenga un inseparable uso religioso. Es precisamente esta última

característica, la inseparabilidad del valor de culto y la necesidad de su disfrute cultural, lo que estaba ya en la base de la normativa de 1939. En efecto, la Ley n.º. 1089 de 1939, va a tomar en consideración las cosas pertenecientes a los entes eclesiásticos para disponer que, al regular la materia, el Ministro competente deberá proceder «de acuerdo con la autoridad eclesiástica» a fin de que las «exigencias del culto» sean salvaguardadas. Margiotta Broglio resalta que en el Concordato de 1929 no se hacía referencia a los bienes culturales de interés religioso, limitándose en esta materia a regular las excavaciones y los traslados de los cuerpos santos en las catacumbas, cuya disponibilidad venía reservada a la Santa Sede, con la carga de su custodia, mantenimiento y conservación, sin distinguir, además, entre enterramientos judíos y cristianos.

Pero en las disposiciones de raíz pacticia de la segunda mitad de los años ochenta se han establecido instrumentos idóneos que, por una parte, respeten plenamente la exclusiva competencia institucional del Estado italiano en materia de tutela del patrimonio histórico-artístico de la nación, la diversidad de intereses y valores y la separación de los respectivos órdenes, y, por otra parte, permitan alcanzar un equilibrio dinámico en un asunto de tal complejidad, «redefiniendo y remodelando estructuras y funciones tradicionales a fin de que puedan satisfacer adecuadamente los objetivos y las exigencias de todos los ciudadanos».

Fabio Merusi es autor del trabajo relativo a los principios constitucionales y el sistema pacticio, titulado «Bienes culturales, exigencias religiosas y art. 9 de la Constitución» (págs. 21-28).

Este precepto ha introducido, en opinión del profesor de la Universidad de Pisa, una «disciplina horizontal» de tales bienes, por cuanto el interés de la República en lo relativo a la tutela del patrimonio histórico-artístico nacional prescinde de la pertenencia subjetiva de tales bienes y además, de las posibles implicaciones de su régimen de propiedad, mientras que la referencia a «la Nación» no viene a indicar una relación de pertenencia sino a significar que este patrimonio es «expresión del Estado-comunidad», en el cual el factor religioso está presente y puede representar un componente del valor cultural de los bienes tutelados. El autor establece que, tras la aprobación del art. 12 del Concordato, el factor religioso —al menos en lo que respecta a la confesión católica— debe ser siempre tomado en consideración, mediante la específica valoración que ha de hacer la autoridad religiosa a la hora de determinar el estatuto de los bienes culturales y que ha de concurrir en el momento de hacer un «juicio de valor subjetivo», en expresión de Merusi. Es decir, se impone la ponderación de diversos intereses, ligados todos al valor cultural, uno de los cuales puede ser el interés religioso inseparablemente vinculado al bien mismo.

Giorgio Pastori, de la Universidad Católica de Milán ha trabajado sobre el art. 12 del Acuerdo de 18 de febrero de 1984, en el marco del ordenamiento jurídico italiano (págs. 29-40). Este precepto ha planteado, en los años transcurridos desde la entrada en vigor del Acuerdo de revisión concordataria de 1984 entre el Estado y la Iglesia Católica, una constante discusión acerca de su compatibilidad o no con las normas

constitucionales en la materia, en particular con el art. 9 de la Constitución que atribuye a la República la competencia de la tutela y conservación del patrimonio histórico-artístico de la Nación. La novedad de su aportación radica en que, en su criterio, la formulación del art. 12 no sólo confirma que el Estado es plenamente soberano para definir las propias leyes en la materia, sino que la misma norma puede constituir un desarrollo y una prolongación del principio constitucional que reserva a la República la tutela del paisaje y del patrimonio artístico de la Nación, aunque en ningún caso las disposiciones concordadas por las partes en el marco del art. 12 pueden representar «un régimen diferenciado de tutela», tratándose de una normativa que tiene, sobre todo, un carácter integrador y además, de aplicación de la legislación italiana. Así lo demuestra Merusi en su exégesis del precepto, resaltando como punto central la declaración inicial de la norma en el sentido de que la Santa Sede y la República italiana, en sus respectivos órdenes, colaboran en la tutela del patrimonio histórico-artístico. Ambas partes convergen en un fin, la protección del patrimonio cultural, a través del cauce que el mismo precepto establece, la armonización de la aplicación de la ley italiana con las exigencias de carácter religioso. El texto no pone en duda que es la ley civil la que debe aplicarse a la totalidad de los bienes culturales, incluidos los de interés religioso pertenecientes a instituciones y entes eclesiásticos. Pero pone el acento en que al tiempo de aplicar tales leyes, debe necesariamente tenerse en cuenta una exigencia de otro orden: la protección del interés religioso inherente a tales bienes que habrá de quedar asegu-

rado en el momento de establecer las líneas operativas y las modalidades de intervención. En opinión del autor, ambos intereses, el cultural y el religioso, son intereses constitucionalmente reconocidos y protegidos y deben encontrar su punto de equilibrio, sin que uno quede sacrificado al otro. En este sentido, dedica parte de su intervención a establecer las posibles líneas de actuación del art. 12.

Francesco Finocchiaro, de la Universidad «La Sapienza» de Roma, es autor del trabajo relativo a las normas pacticias sobre bienes culturales de interés religioso y el sistema de fuentes (págs. 41-53). Las normas básicas que disciplinan la materia son el art. 9 de la Constitución italiana, el art. 12 del Acuerdo de revisión del Concordato de 1984 y las disposiciones derivadas de los acuerdos con las confesiones religiosas distintas de la católica. El autor vuelve a hacer una exégesis del art. 12, norma que gran parte de la doctrina ha calificado de conflictiva y ambigua, pero su principal aportación radica en unas claras indicaciones sobre las fuentes normativas adecuadas, en función de la materia a regular. Concluye Finocchiaro que la pertenencia ideal de los bienes culturales al «Estado-comunidad» comporta, de hecho, la obligación para el «Estado-ordenamiento» de tutelar el patrimonio histórico y artístico, prescindiendo de la propiedad del mismo al configurarse como un patrimonio «nacional» que compete a todos sus niveles, personales y territoriales, públicos y privados. En este punto, el propio Finocchiaro precisa que, en sede de aplicación, la armonización de la ley estatal con las exigencias de culto que las normas pacticias prevén, afecta sólo a

los bienes históricos y artísticos de los entes eclesiásticos que tengan «un destino religioso actual». Con la expresión «Estado-ordenamiento» el autor indica, de manera unitaria, el aparato estatal y el «Estado-comunidad», es decir, la comunidad nacional jurídicamente organizada en Estado.

Carlo Cardia, de la Universidad de Pisa, miembro de la Comisión gubernativa para la actuación del Concordato, profundiza sobre la tutela y «valorizzazione» —expresión que un sector de nuestra doctrina administrativista que se ha ocupado de este tema traduce como «puesta en valor»— de los bienes culturales de interés religioso entre el Estado y la Iglesia Católica (págs. 55-75). Hace el autor un estudio histórico que se remonta a las cuatro propuestas de modificación del Concordato redactadas entre 1976 y 1979, en el marco del largo y complejo proceso de negociación entre la Santa Sede y el Estado italiano para la revisión del Pacto de 1929. En todas ellas se incluye la creación de una Comisión mixta que debería formular las normas, subordinadas a la aprobación de ambas partes, para la salvaguardia del patrimonio artístico italiano que tuviera carácter sacro. Los proyectos de 1980 y 1982 no se refieren a esta Comisión (aunque este último alude a una disciplina de acuerdos con la Conferencia Episcopal), pero la redacción definitiva del art. 12 del Acuerdo de 1984, limita el ámbito de operatividad de las disposiciones pacticias, reclamando la autonomía de los dos órdenes, recordando que las disposiciones a concordar están sometidas a la legislación italiana y poniendo de relieve que los bienes culturales a que se refiere son los que per-

tenecen a entes e instituciones eclesiásticas.

Dario Tedeschi, abogado, vicepresidente de la Unión de las Comunidades Hebreas, trata sobre la misma cuestión que el autor anterior, pero en el seno de la confesión judía (págs. 77-88). Un aspecto interesante de su aportación es que, en su opinión, al abordar la regulación de estos temas debe evitarse que prevalezca la que el denomina «visión museográfica», es decir, la contemplación exclusiva de aspectos puntuales o parciales, y debe buscarse aquel enfoque integrador que está en la base de las normas del último decenio y que supera una simple declaración de intenciones para alcanzar a prever los mecanismos que permitan preservar y revalorizar los bienes culturales de interés religioso de propiedad confesional, garantizando al mismo tiempo su más amplio disfrute.

Gianni Long, del Congreso de los Diputados, miembro de la Comisión de la Iglesia evangélica para las relaciones con el Estado, aborda la tutela del patrimonio cultural en los convenios con las confesiones distintas de la católica, aprobados con las leyes de 1984, 1988 y 1989 (págs. 89-97). El concepto de patrimonio histórico, moral y material, tal como se perfila en los acuerdos, puede comprender otros bienes al margen de los que la doctrina ha individualizado tradicionalmente, que se amplía por fuerza a la vista de los otros cultos presentes en el territorio del Estado (con las evidentes diferencias debidas a la diversa trayectoria de aquéllos, y a la diferente naturaleza de sus establecimientos), y afecta también a los sectores en los que se requiere una armonización de las medidas de intervención y

de la propia normativa. En este punto, no pueden soslayarse la catalogación, la restauración, la custodia y aseguramiento, el conocimiento y la promoción del disfrute, así como el acceso a las fuentes archivísticas y documentales y a los fondos bibliográficos. Y todo ello debe llevarse a cabo a través de los procedimientos oportunos, orientados siempre a la tutela y a la puesta en valor. Procedimientos que serán distintos, obviamente, en función de las peculiares características y tradiciones de cada confesión y de las previsiones contenidas en los acuerdos. De ello resulta, como subraya Long, que ningún procedimiento, aunque sea claramente favorable, incoado por el Estado o las regiones pueda ser adoptado unilateralmente respecto de aquellas confesiones para las que los instrumentos pacticios hayan previsto la vía de una comisión mixta. De lo contrario, se encontrarían «fuera de la legítima discrecionalidad de los órganos estatales».

La segunda parte de la investigación lleva como título genérico «Competencias regionales y acción del episcopado». Recoge dos recopilaciones normativas:

Giovanni Tarantini, de la Universidad de Perugia, se ha encargado de la recopilación de la normativa regional en materia de bienes culturales de interés religioso (págs. 101-128).

Giorgio Feliciani, profesor de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico en la Università Cattolica de Milán, donde dirige el Centro de Estudios sobre los Entes Eclesiásticos (CESEN), forma parte, por designación de la Santa Sede, de la Comisión paritaria encargada de preparar la entrada en vigor de

las disposiciones concordatarias en materia de bienes culturales. Es el coordinador de esta edición, y autor del trabajo de la segunda parte de esta obra, relativo a la normativa de la Conferencia Episcopal Italiana y los bienes culturales de interés religioso (págs. 129-145).

En ambos estudios se analiza el sistema de relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas, su evidente complejidad, la reciente institución de un ministerio para los bienes culturales y ambientales (1974), las limitaciones establecidas en la ley de creación (n. 5/1975), algunas medidas urgentes adoptadas de modo sucesivo (concursos, custodia, medidas contra robo e incendio, organización del Ministerio...); se alude a la fallida reforma de la legislación de tutela, que se había anunciado en 1977, la competencia de las regiones, tanto de autonomía ordinaria como especial, y de las provincias autónomas en materia de bienes culturales; las intervenciones establecidas por la legislación regional tras las transferencias competenciales de 1972 y 1979... Estos son algunos de los aspectos desarrollados en ambas investigaciones recogidas en este volumen y que ponen de relieve las dificultades para la adopción de normas en materia de tutela de los bienes culturales de interés religioso pertenecientes a las confesiones, recogidos en el Acuerdo con la Iglesia Católica de 1984, y en los convenios con otros cultos, de los años 1984, 1985 y 1987. El objeto de su estudio queda circunscrito al ámbito del Estado italiano, aunque alguna reflexión sea extrapolable a la problemática surgida en otros países, de modo particular, a la realidad española.

La tercera parte busca encuadrar la materia en el contexto internacional y comunitario. Son dos los trabajos que integran este capítulo:

Francesco Francioni, profesor de la Universidad de Siena, asesor del Gobierno italiano para la revisión de los convenios internacionales sobre el patrimonio mundial, en calidad de experto, se ha ocupado de analizar los problemas relativos al patrimonio cultural, la soberanía de los Estados y los conflictos armados (págs. 149-162).

Giovanni Barberini, de la Universidad de Perugia, miembro de la delegación italiana en la CSCE, ha estudiado el patrimonio cultural, las directivas comunitarias y la normativa de los países miembros de la Unión Europea (págs. 163-185). Se trata, en ambos casos, de prestar especial atención a los aspectos de Derecho internacional y comunitario. Son dos campos muy significativos por cuanto, en el primer caso, se plantean los problemas derivados de situaciones bélicas (la revisión de los criterios de aplicación de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, firmada en París en 1972, y el que está actualmente en fase de negociación para reforzar la Convención de La Haya de 1954 sobre la protección en caso de conflicto armado). En el segundo caso, Barberini examina la forma en que cada país trata de hacer frente a la difícil prueba de la libre circulación de los bienes culturales en el interior de la Unión europea y la armonización de los mecanismos de tutela.

La cuarta parte recoge experiencias para contrastar. Se inicia con dos aportaciones individuales:

Franco Borsi, de la Universidad de Florencia, miembro de la Comisión gubernamental para la actuación del Concordato recoge las líneas programáticas para los órganos del Estado (págs. 189-193). Su aportación se centra, básicamente, en los procedimientos administrativos para definir y poner en práctica las intervenciones en materia de bienes culturales, cuestión siempre conflictiva, tanto en el ámbito político como en el doctrinal. Prevalence, no obstante, la necesidad de articular procedimientos rápidos y simplificados, sobre todo a la vista de la situación de emergencia en que se encuentra una gran parte de este vasto patrimonio que corre un peligro inminente. La supresión canónica de numerosas diócesis, parroquias y entes derivada de la aplicación de la ley n. 222/1985, ha agudizado la situación de abandono de ciertos bienes, en palabras de Borsi, «destinados fatalmente a una progresiva y definitiva degradación y dispersión».

Giancarlo Santi, arquitecto, miembro de la comisión de la Santa Sede para la aplicación del Concordato, recoge las líneas programáticas para los órganos de la Iglesia, cuya gestión ha sido confiada a las Conferencias regionales y a la Conferencia Episcopal italiana, que han asumido la responsabilidad de los procedimientos de intervención (págs. 195-201). El autor analiza el esquema organizativo en los distintos niveles, ya que muchas diócesis han establecido también oficinas y comisiones en materia de bienes culturales, estando prevista la creación de una asesoría para las Conferencias regionales y de un órgano nacional con competencias en el ámbito comunitario.

El estudio de las cuestiones relativas al interés cultural y el valor religioso y los problemas de aplicación de la normativa vigente, se articula en torno a una ideal mesa redonda (págs. 203-276). Las aportaciones de sus participantes constituyen una sistemática y completa reseña de los problemas que supone, en una sociedad compleja y pluralista, la necesaria confrontación entre la legislación del Estado en materia de patrimonio cultural de interés religioso y las exigencias culturales/culturales de las confesiones religiosas representadas en su territorio; incluso, desde cierto prisma, el conflicto presenta perfiles casi idénticos en toda la Unión Europea. Han participado en estas reuniones Antonio Paolucci, superintendente para los bienes históricos y artísticos de Florencia, Ministro para los bienes culturales y ambientales, y Crispino Valenziano, consultor de la CEI para los bienes culturales. Ambos han dialogado en torno a los bienes histórico-artísticos. El patrimonio archivístico es analizado por Maura Piccialuti, del Archivo Central del Estado, y Emanuele Boaga, de la Asociación de archivistas eclesiásticos. El patrimonio bibliográfico es estudiado por Salvatore Bordonali, de la Universidad de Palermo; Francesco Sicilia, Director General para el patrimonio bibliográfico; y Pier Francesco Fumagalli, de la Asociación de bibliotecarios eclesásticos. La diversidad de los temas abordados —desde los perfiles constitucionales a las normas de origen pacticio, desde los aspectos operativos y técnicos relativos a las diferentes categorías de bienes (históricos, artísticos, documentales, bibliográficos—) a la vertiente práctica en la aplicación de la normativa regional y la de las conferencias episcopales, cuestiones de carácter

internacional o comunitario, han sido objeto de análisis y reflexión por parte de todos estos reconocidos expertos en las diferentes materias.

Los dos últimos trabajos ofrecen una visión más general desde la perspectiva de la Iglesia:

Francesco Marchisano, miembro de la Comisión Pontificia para los bienes culturales de la Iglesia, expone las actuaciones de esta Comisión en el ámbito de las organizaciones europeas y mundiales.

Attilio Nicora, Obispo de Verona, Presidente de la Comisión de la Santa Sede para la aplicación del Concordato, hace un balance de la investigación, subrayando que el progresivo desarrollo de un sentido de responsabilidad por parte de la comunidad eclesial, el empeño constante por parte de las autoridades centrales y periféricas competentes en la administración de los bienes culturales y la actividad de promoción que se ha desplegado en los últimos años en el seno de ciertas asociaciones, han dado lugar a una «cultura de colaboración» con un contenido singular. En efecto, esta colaboración debe ser entendida como un modo de afrontar estos problemas que, de modo consciente y convencido, pondere siempre su destino, intrínseco e inseparable, al uso religioso y al disfrute cultural.

En una recensión publicada el pasado año (María Vismara Missiroli, *Codice dei beni culturali di interesse religioso*, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano, 1993, en «Ius Canonicum», 35, 1995, págs. 355-358), me ocupé de dar noticia de la aparición de una interesante y valiosa recopilación de la normativa canónica sobre bienes culturales de interés re-

ligioso en el ámbito del Derecho italiano. En junio de ese mismo año, se celebró en Roma el Congreso cuyos estudios y debates quedan plasmados en este libro que ahora comentamos. También en 1993, el n.º 25 de «Quaderno di Italia Nostra» publicó *La tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti agli enti ecclesiastici*, destacando los estudios de P. Bellini, S. Lariccia y L. Guerzoni. Poco tiempo antes, en 1989, F. Petroncelli publicó en «Archivio giuridico» un estudio sobre *Attuali prospettive di tutela dei beni culturali d'interesse religioso*. Estas son sólo algunas referencias bibliográficas que ponen de manifiesto que el concepto de «bien cultural de interés religioso» está ya plenamente consolidado en la doctrina italiana y que la tutela de esta específica categoría dentro de los bienes culturales ha despertado una atención creciente, no ya sólo en la esfera del Derecho Eclesiástico, sino en otras disciplinas jurídicas. Son muchas las muestras de interés científico que esta materia presenta para un amplio sector doctrinal en Italia. Pero ahora, además, se han incorporado al debate representantes de otros ámbitos, públicos y privados, para tratar de resolver de modo armónico los múltiples problemas que la materia plantea, articulados básicamente en torno a la cuestión de la titularidad del bien cultural, su disfrute por todos los ciudadanos, la instancia competente para establecer medidas de tutela y las necesarias garantías sobre la preservación del interés religioso y el fin de culto ínsito en el bien mismo.

El valor de esta obra radica en que éstas y otras cuestiones se abordan desde una perspectiva original: la de los gestores, los que de modo directo inter-

vienen en el patrimonio cultural, sea desde la administración del Estado o desde los órganos de las confesiones religiosas, sus asociaciones o institutos, que tienen directamente encomendada la administración y gestión sobre los bienes. La obra que comentamos tiene, en mi opinión, un indiscutible mérito: refleja el esfuerzo decidido de quienes pueden aportar soluciones para articular el régimen jurídico del patrimonio cultural perteneciente a entes e instituciones eclesíásticas, desde una visión general e integradora. Es un intento notable de superar los planteamientos tradicionales de este problema, que todavía subyacen, en gran medida, en la doctrina española: o el enfoque administrativista, que considera prevalente el destino público de estos bienes al disfrute colectivo, o el criterio iusprivatista que reivindica la propiedad de los bienes por parte de los entes religiosos, para justificar la dedicación exclusiva al fin de culto. En esta obra, se propone una «cultura de colaboración» que tiene como línea medular la inseparable condición que se da en estos bienes: el interés religioso, unido indisolublemente a su valor cultural. En este sentido, es un ejemplo a seguir entre nosotros por parte de los poderes públicos encargados de la tutela y conservación de estos bienes, en cuanto forman parte del patrimonio cultural de nuestro país, y de las autoridades eclesíásticas, que han de garantizar que estos bienes no sean apartados de su destino al culto, justificación última de su propia existencia.

BEATRIZ GONZÁLEZ MORENO

JAVIER FERRER ORTIZ (coordinador),
JUAN FORNÉS, JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ